

Huir de Centroamérica



Huir de Centroamérica

Bernard Duterme
Lizbeth del Rosario Gramajo Bauer
Delphine Marie Prunier y Sergio Salazar
Gabriela Díaz Prieto
Aviva Chomsky
Jazmín Benítez López
Solangel Nazaret Rejón Apodaca
Juan José Hurtado Paz y Paz
José Luis Rocha
Mario Zúñiga Núñez
Sergio Salazar Araya
Ruth Piedrasanta Herrera
Carolina Rivera Farfán

Editorial  **popular**

Editorial Popular, S.A., Madrid, 2022

C/ Leo, 7- local 2. Madrid 28007

Tel.: 91 409 35 73

E-Mail: popular@editorialpopular.com

www.editorialpopular.com

Ilustración portada: Marcelo Spotti

Diseño de colección: Francisco Pino

I.S.B.N.: 978-84-7884-921-5

Depósito Legal: M-22966-2022

Imprime: Cooperación Editorial, S.L.

Cualquier forma de reproducción, distribución pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos-www.cedro.org), si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Índice

Huir de América Central.....	7
Bernard Duterme	
Causas, crisis y problemática migratoria en el corredor centroamericano.....	33
Lizabeth del Rosario Gramajo Bauer	
Fracturas, fronteras y movilidad centroamericana frente al covid	61
Delphine Marie Prunier y Sergio Salazar	
Mujeres centroamericanas que buscan asilo en América del Norte	91
Gabriela Díaz Prieto	
La migración como resistencia, la migración no es la crisis	105
Aviva Chomsky	
Política migratoria de México y el Triángulo Norte Centroamericano.....	117
Jazmín Benítez López y Solangel Nazaret Rejón Apodaca	
Derecho a la migración y política antimigratoria de Estados Unidos	143
Juan José Hurtado Paz y Paz	
Explosión post-2018 de la emigración nicaragüense	153
José Luis Rocha	
Migración y pandillas: de El Salvador a Estados Unidos, y viceversa	169
Mario Zúñiga Núñez	
Temas del “retorno” a Honduras de migrantes expulsados.....	193
Sergio Salazar Araya	
Primaveras y contragolpes de las migraciones guatemaltecas	209
Ruth Piedrasanta Herrera	
Trabajo precario de guatemaltecos en la Chiapas mexicana.....	221
Carolina Rivera Farfán	

Huir de América Central

Bernard Duterme¹

Dos hechos evidentes. Por un lado, la falta de democratización de las sociedades centroamericanas –y la consiguiente inseguridad física, social, medioambiental o política– como la principal razón para tener que huir de la región. Por otro lado, las condiciones de la propia migración –entre políticas migratorias inhumanas y criminalidad endémica– como un ataque sistémico a la integridad de las personas y al derecho a la movilidad.

Centroamérica, ¿tierra de la emigración? El alto grado de movilidad centrífuga de los nacionales del istmo centroamericano, que lleva más de medio siglo operando, es una clara prueba de ello. La esperanza o la obligación de huir del país de origen se ha convertido en algo tan familiar como la violencia –física, social, económica, política, climática, etc.– que socava la región. Entre el 10 y el 25 % de las poblaciones nacionales ya no vive en su casa. Y cada año, cientos de miles de migrantes más, entre ellos un número creciente de mujeres y niños, prueban suerte. Una vez que llegan a Estados Unidos o a cualquier otro lugar, ayudan económicamente a sus familias que se quedaron

1. Director del CETRI - Centre Tricontinental, autor o coordinador de varios libros y estudios sobre Centroamérica.

en casa, lo que supone entre una octava y una cuarta parte del PIB de su país de origen.

En Centroamérica, la migración es consustancial para la vida de millones de personas, eso es un hecho. Pero esta migración tiene una historia que se remonta a aquella estructuralmente injusta de la formación de estas sociedades periféricas, de estas tierras explotadas mucho tiempo y que fueron exploradas, colonizadas, negociadas, despojadas, turistificadas..., mucho antes de que sus propios habitantes vieran la posibilidad de escapar. Es como si, al final, la emigración de abajo, de “gente de escasos recursos”, fuera un contrapeso a la inmigración de arriba, secular, de nobles y burgueses que vinieron a nutrir las filas de los oligarcas locales.

Desde los conquistadores hasta la CIA

A partir del siglo XVI, los conquistadores españoles, durante 300 años se hicieron con el control de territorios habitados hasta entonces por pueblos... prehispánicos. Un mosaico de grupos étnicos más o menos importantes (Talamancas, Nicaraos, Chorotegas, Ramas, Matagalpas, Sumus, Payas, Lencas, Pipiles, Nacos, Maya Quichés, Kakchiquels, etc.), estaban, en movimiento y en interacción más o menos conflictiva ellos también, y desde entonces han sido agrupados, controlados y explotados por los colonizadores bajo el nombre común de “indios de América”, luego, como mucho “indígenas” (Torres-Rivas, 1993).

Fue bajo el “Reino de Guatemala” –o “Capitanía General de Guatemala”, incluida a su vez en el “Virreinato de Nueva España”, que abarcaba también México, la mitad de Estados Unidos y el Caribe e incluso Filipinas– donde se configuró la relativa unidad sociopolítica de la

Centroamérica “histórica”, que incluye a Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala². La independencia obtenida de la Corona española en 1821 por las élites locales “criollas”, aquellos “blancos nacidos en las colonias”, abrió a las “Provincias Unidas de Centro de América” (1821-1838) primero, y luego cada uno de los cinco países centroamericanos, a otros apetitos, influencias e intervenciones.

Los de Estados Unidos en primer lugar. De esta época procede el texto de la “Doctrina Monroe” (1823), que lleva el nombre del quinto presidente de Estados Unidos: “América para los americanos”. Su objetivo principal era mantener a los europeos alejados del continente, pero también expresaba, en un doble sentido geográfico, los objetivos expansionistas de Estados Unidos... de América. Sin embargo, solo en las últimas décadas del siglo XIX, el nuevo imperio dio a la profecía de James Monroe un carácter colonialista. Empezando así una expansión militar, política y económica sobre todo en Centroamérica, su natural y eterno “patio trasero” (*backyard*).

Durante más de un siglo, Estados Unidos hará y deshará gobiernos allí en función de sus intereses en la región. Los intereses de sus empresas y sus mercados. Por ejemplo, el del banano como elemento estructurador de la historia contemporánea de América Central y sus “repúblicas bananeras”. O como instrumento para la penetra-

2. En aquella época, el actual estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, formaba parte de ese país, y en 1824, tres años después de la caída del imperio español, se unió a México por referéndum. El actual Belice, al noreste de Guatemala, fue durante mucho tiempo un territorio en disputa entre Gran Bretaña y España, rebautizado como Honduras Británica en 1862, no se independizó de Londres hasta 1981, pero siguió siendo miembro de la Commonwealth. Panamá no se unió definitivamente a Centroamérica hasta 1903, cuando se separó de Colombia, el antiguo Virreinato de Nueva Granada, con la ayuda de Estados Unidos, que entonces tomó el control de la construcción del canal interoceánico.

ción del capitalismo agroexportador y la consolidación de la dependencia económica del istmo centroamericano respecto al Norte (ver el excelente documental de Mathilde Damoiseil *La loi de la banane*, Arte, 2017).

Lo mismo ocurre con el café, como en el pequeño El Salvador (dos tercios del tamaño de Bélgica), que fue declarado “república cafetalera” en el siglo XIX, séptimo productor mundial en 1920 y tercer exportador de América Latina en 1965, todo ello bajo el dominio de las “catorce familias” de la oligarquía nacional salvadoreña. Oligarquía nacional, que al igual que sus vecinos, incluye a muchos/as inmigrantes de origen europeo que llegaron a Centroamérica entre 1850 y 1910. Quizá el ejemplo más evidente sea la comunidad guatemalteca alemana, que también está sobrerrepresentada en el sector del café.

La United Fruit Company (UFC), fundada en 1899 y rebautizada como Chiquita en 1989 para ocultar su mala reputación, domina el 75 % del comercio mundial de banana... ¡El 65 % de las tierras agrícolas de Guatemala! A principios de los años 50, el presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, al frente de uno de los gobiernos con vocación de desarrollo nacional que ha vivido América Latina tras la Segunda Guerra Mundial, se atrevió a sentar las bases de una “reforma agraria”. Reforma que afectaría inevitablemente al comercio transnacional de la fruta. Sin embargo, no fue una buena idea: en 1954 fue derrocado en un golpe de Estado respaldado por la CIA estadounidense, cuyo director era accionista de la UFC, y sustituido por un régimen militar que se mantuvo en el poder durante más de treinta años.

Ante el bloqueo de las estrategias de reforma por parte de la oligarquía, los militares y Estados Unidos, surgieron movimientos revolucionarios en la región en un in-

tento de cambiar el orden de las cosas. Las guerrillas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en Guatemala se enfrentaron a los poderes establecidos. Y estos últimos tomaron represalias más allá de toda proporción, ya que son responsables de la muerte de más del 90 % de los cientos de miles de víctimas humanas, principalmente civiles (y mayas en Guatemala; masacres que la ONU ha calificado como “actos genocidio”), así como del desplazamiento interno y externo de millones de centroamericanos/as.

Solo el FSLN consiguió derrocar la dictadura de la dinastía Somoza en Managua en 1979, que estaba en el poder desde 1936. Sin embargo, durante una década los Estados Unidos del presidente Reagan llevaron a cabo una “guerra de baja intensidad” contra la Nicaragua sandinista utilizando campesinos “contrarrevolucionarios”. Y así, con el telón de fondo de una Guerra Fría intensa pero en extinción, se protegió del efecto dominó de una “contaminación comunista” de Centroamérica. En 1990, el FSLN, convertido en partido político, perdió el poder en unas elecciones distorsionadas por la amenaza “yanqui” de seguir agrediendo a Nicaragua. Y tras la caída de la URSS, se firmaron “acuerdos de paz” entre las autoridades y los revolucionarios salvadoreños en 1992, y entre sus equivalentes guatemaltecos en 1996.

Lamentablemente, la casi nula aplicación de estos acuerdos de paz dejó intactas las causas del conflicto armado y de la primera gran explosión de la emigración centroamericana. La propia ONU se refiere a esto en particular en su informe *Guatemala, memoria del silencio* (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, UNOPS, 1999).

“La injusticia estructural, el cierre del espacio político, el racismo, la profundización de un marco institucional excluyente y antidemocrático, así como la reticencia para impulsar reformas fundamentales” son, a su juicio (y al nuestro), factores que determinan profundamente tanto el surgimiento de movimientos revolucionarios y enfrentamientos pasados como el descontento social y el éxodo actuales. Un éxodo que no se detendrá con el desarme de las guerrillas. Al contrario.

¿Normalización democrática?

La llamada “normalización democrática” en Centroamérica tras el fin de las dictaduras militares y las guerrillas revolucionarias se asemeja al doble proceso de liberalización política y económica que vivió todo el continente a finales del siglo pasado. Los resultados fueron decepcionantes, especialmente en el istmo. Primero, políticamente. Si el fin de las guerras fue el logro de este período, la democratización fue solo una fachada. Formal, superficial, electoral. Y aun así. La debilidad de las instituciones “ajustadas estructuralmente” por las políticas del Consenso de Washington –privatización, liberalización, desregulación– es patente. Renovación de los lazos entre las élites políticas y económicas, persistencia de la dominación oligárquica, el poder neopatrimonial y diversos abusos criminales: corrupciones contagiosas y colusiones mafiosas.

Desde el punto de vista económico, después de las anémicas tasas de crecimiento de los años ochenta y noventa, América Central experimentó un repunte significativo y sostenido a principios del siglo XXI, gracias al “boom de las materias primas” en los mercados mundiales impulsado por la fuerte demanda y la expansión de

China. Los precios del café, del azúcar, del banano, pero también de la carne, del aceite de palma, del oro, de la plata, del níquel, etc. se han disparado. La tendencia es global. Nunca antes se habían extraído tantos minerales en América Latina para exportarlos a los países ricos como en los últimos veinte años. Este fenómeno reactiva la estructura “extractivista” extrovertida y dependiente de las pequeñas economías centroamericanas, especialmente en Honduras, Guatemala y Nicaragua, “reprimarizándolas” aún más.

Su pequeña cuota industrial se limita casi por completo a esas unidades de ensamblaje textil en “zonas francas”, las maquiladoras, cerca de los aeropuertos, donde los inversores estadounidenses y asiáticos escapan a todas las regulaciones fiscales, sociales y medioambientales. Desde entonces, la región se ha encontrado en una situación de desventaja, ya que los precios de las materias primas volvieron a caer en 2014-2015 y luego en 2020, cuando la caída de la actividad tras la pandemia provocó “la peor recesión económica en décadas”, según el Fondo Monetario Internacional. Altamente sensible a la volatilidad de los precios y mercados internacionales, el modelo de desarrollo preferido no tiene alternativa interna: las economías no se han diversificado y las fiscalidades siguen siendo de las más bajas y regresivas del mundo (Duterte, 2018). De ahí el regreso de altos niveles de endeudamiento.

Las implicaciones sociales y de sociedad de esta misma lógica de concentración que durante años ha regido la no distribución de tierra, riqueza y ganancias en Centroamérica son, cuando menos, problemáticas. Alimenta la violencia que azota a los Estados más pobres y los altos índices de emigración que sufren. Aunque varios indicadores sociales han mejorado en los últimos cincuenta años

—como la esperanza de vida y el acceso a la educación primaria, especialmente de las niñas— y aunque los niveles de pobreza disminuyeron hasta 2015-2016 gracias a la euforia agroexportadora de principios de este siglo, las disparidades y la precariedad siguen siendo desproporcionadas.

Aunque los datos varían según las fuentes y los criterios utilizados, en general, más de uno de cada dos centroamericanos vive por debajo del umbral de la pobreza (CEPAL, 2018). Los peores resultados se registran en orden descendente en Honduras (74,3 %), Guatemala (67,7 %), Nicaragua (58,3 %), El Salvador (41,6 %), seguidos de Panamá (21,4 %) y Costa Rica (18,6 %). Nicaragua tiene la renta nacional bruta per cápita (RNB/h) más baja: 1.900 dólares. Es seis veces menor que en Costa Rica y treinta y cuatro veces menor que en Estados Unidos, los dos principales países de destino de la emigración nicaragüense (data.worldbank.org/country). Pero, sobre todo, los indicadores de desigualdad sitúan a la región entre las más inequitativas. El coeficiente de Gini se acerca ahora a las 50 unidades (frente a las 25 de Bélgica y las 42 de Estados Unidos, correspondiendo el 0 a la igualdad perfecta y el 100 a la desigualdad perfecta, en la que una persona recibe todos los ingresos, es.countryeconomy.com).

La concentración de activos en unos pocos centenares de familias es impactante: según el World Ultra Wealth Report 2019 (wealthx.com), la riqueza de las 1.000 personas más ricas supone hasta tres cuartas partes del PIB regional. Este fenómeno sería especialmente fuerte en Nicaragua, donde las 200 personas más ricas del país acaparan más del doble del PIB nacional, una vez y media en Honduras, 0,8 vez en El Salvador, 0,5 vez en Guatemala y 0,3 vez en Costa Rica. Al mismo tiempo, la gran mayoría de los trabajadores no tienen acceso a un empleo formal, y

mucho menos a cualquier forma de protección social. Según los respectivos bancos centrales, el 61 % de la mano de obra salvadoreña, el 70 % de la hondureña, el 71 % de la guatemalteca y el 80 % de la nicaragüense tienen que conformarse con el sector informal.

Una consecuencia dramática de este acceso desigual a la mesa de los ricos es la “inseguridad alimentaria aguda”, que afecta a más de 7 millones de personas a diario solo en Guatemala, Honduras y Nicaragua (con población total de 33,5 millones de personas), debido a la pandemia y al cambio climático. Esto supone algo más de una de cada cinco personas (WFP y FAO, 2021). En Guatemala, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) informa regularmente de que uno de cada dos niños sufre desnutrición... en este país tropical húmedo, que podría alimentar fácilmente a toda su población varias veces. Solo tres países del mundo están en peor situación.

En cuanto a los “temas de sociedad”, el balance no es más alentador. En un contexto religioso en el que las iglesias evangélicas más bien conservadoras compiten por la popularidad con la Iglesia católica más bien tradicionalista, las políticas sobre la familia, la salud, la educación, etc. están en consonancia. La cultura dominante, decididamente patriarcal, sigue marcada por el machismo y el sexismo devastadores. La dominación masculina de las mujeres tiene pocos resquicios, por no hablar de la situación de las personas homosexuales. Las leyes contra el aborto en Centroamérica se encuentran entre las más estrictas del mundo, especialmente en Nicaragua, Honduras y El Salvador, donde las mujeres pueden pasar años en prisión por un aborto espontáneo (Montoya, 2021a).

Por último, es también lamentable el balance ecológi-

co de la “normalización democrática” en Centroamérica, o más bien del mantenimiento de un modelo de desarrollo que dedica las mejores tierras a abastecer el mercado mundial de materias primas agrícolas, forestales y mineras. Al exterior, se presenta como “eco-responsable” por algunos sectores llamados “verdes”, pero internamente se basa en la lógica asumida de la depredación capitalista. El uso de pesticidas en la industria agrícola, prohibidos en Europa, la contaminación en cadena provocada por la industria extractiva, la deforestación a gran escala (también en este caso, las cifras de la FAO son alarmantes)..., lo que se suma a la extrema vulnerabilidad de una región expuesta regularmente a “sucesos” climáticos, sísmicos y volcánicos.

Violencia criminal y represiva

Como se ha visto, el fenómeno de la migración, que ha ido en aumento desde los conflictos que desgarraron el istmo centroamericano y los “ajustes” neoliberales que le siguieron, es ante todo una muestra de un modelo de desarrollo inicuo. Guatemala, Honduras³, Nicaragua, El Salvador... son “Estados de no-derechos” donde la concentración de poder rivaliza con la corrupción y la impunidad. Todas ellas son economías en las que la exportación desregulada de materias primas y la subcontratación en zonas de libre comercio siguen siendo la columna verte-

3. Enero de 2022, la redacción de este editorial coincide con la toma de posesión de la nueva presidenta Xiomara Castro en Honduras. Procedente de la oligarquía liberal, posicionada a la izquierda desde hace una docena de años, ella promete acabar con el “Estado de no-derecho” y el neoliberalismo. Solo el tiempo dirá si el “socialismo democrático” que dice promover puede sustituir al modelo de “acumulación por desposesión” que prevalece en Honduras (Vásquez, 2021).

bral⁴. La inseguridad alimentaria, la precariedad social y la vulnerabilidad climática resultantes hacen que la gente quiera huir.

Pero la violencia precipita este deseo de huir. En particular, la violencia desenfrenada de las *maras*, las pandillas que explotan el “Triángulo Norte” de América Central: El Salvador, Honduras y Guatemala. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) la considera “la región más peligrosa del mundo”. Esto se debe principalmente a la “tasa de homicidios intencionados”. A lo largo de los años, Honduras y El Salvador se han intercambiado el macabro liderazgo del *ranking* mundial. Líder desde 2010, el primero fue destronado en 2015 por el segundo, con 105 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero desde 2019, se dice que Honduras vuelve a estar por delante de El Salvador. Y Guatemala no se queda mucho atrás (dataunodc.un.org).

Así, en relación con su peso demográfico, el Triángulo Norte es dos o tres veces más mortífero que México (devastado por las masacres de los narcotraficantes), diez veces más mortífero que Estados Unidos y cincuenta veces más mortífero que Europa Occidental. La violencia político-ideológica de las fuerzas militares y revolucionarias de ayer ha sido sustituida por una criminalidad rampante y opresiva. Por una violencia anárquica y mafiosa, peor en sus consecuencias humanas y sociales. Con, como principales actores, las bandas, las *maras*, que “gobiernan”,

4. Evidentemente, Costa Rica y Panamá son casos especiales por diversas razones históricas, demográficas y geopolíticas (ver Torres-Rivas, 1993; Rouquié, 1992). No tienen los niveles de pobreza, violencia y emigración de los cuatro países del norte de Centroamérica. Sin embargo, sería un error considerarlos como democracias sociales pacíficas. El mismo modelo de desarrollo desigual y predatorio prevalece en estos países, aunque menos desigual en Costa Rica y más financiero en las orillas del Canal de Panamá.

siembran el terror y se matan entre sí en zonas, barrios y familias sobre las que se disputan el control.

Este fenómeno, importado de Los Ángeles a mediados de los 90 con la repatriación forzosa de pandilleros centroamericanos a su país de origen, ha echado raíces en lugares donde aún circulaban armas de enfrentamientos anteriores (ver Mario Zúñiga Núñez en este libro). De eso también huyen los/as centroamericanos/as: las amenazas cotidianas, las frustraciones que enfadan o desaniman, la inseguridad, la falta de perspectivas que llevan a los jóvenes de los barrios pobres a ver la elevación social solo en las bandas armadas, grandes o pequeñas, el crimen y la extorsión, y entonces la única forma de escapar de la espiral de violencia es emigrar lejos.

A menudo, es cuestión de huir o morir. Huir de las *maras*, esas microsociedades totalitarias con signos de pertenencia y rituales de obediencia alienantes –obligados a unirse, se les prohíbe salir. Se dice que las *maras* tienen entre 50.000 y 80.000 miembros, una cuarta parte de los cuales están en prisión. Según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas), el 10 % de la población depende de ellas: una de cada diez personas está vinculada a ellas de una u otra forma. Las dos principales –la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18– tienen múltiples ramificaciones y hacen que secciones enteras de la vida social y económica de los barrios dependan de su adscripción a ellas.

Huir de la extorsión de las *maras*, por supuesto, pero también huir de Estados incapaces de frenar la impunidad: según la ONUDD, entre el 95 y el 98 % de los delitos quedan impunes. Estados que, a su vez, están azotados por una corrupción incesante y por diversos grados de colusión, incluso de negociación o de regateo electoral,

con alguna banda armada o cártel de la droga. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), casi el 90 % del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos pasa actualmente por Centroamérica, como resultado de la concentración de los esfuerzos de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en México, el Caribe y Colombia. Esto favorece aún más la actividad de las pandillas.

En la mayoría de los casos, especialmente en Guatemala, El Salvador y Honduras, las elecciones se ganan sobre la base de discursos de seguridad y promesas anticorrupción. Sin embargo, una vez en el poder, los impulsos punitivos y los compromisos éticos pronto resultan ineficaces. Los primeros no pueden valerse por sí mismos, los segundos no pueden resistir la atracción del “Estado botín”, y ambos se desmoronan como resultado de colusiones y otras prebendas, lo que se conoce en Guatemala desde hace varios años como el “pacto de los corruptos”. Del resto se encarga la debilidad estructural de las instituciones públicas que ya no tienen el “monopolio de la violencia legítima” en algunas zonas “sin ley”. Y la quimérica idea de una política de desarrollo real, soberana y redistributiva que ataque la raíz del problema se pospone indefinidamente.

A la violencia criminal, que es un factor decisivo de expulsión en el “Triángulo Norte”, se suma la violencia represiva de las autoridades. Violencia contra individuos y grupos movilizados contra la industria extractiva, el autoritarismo o la corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras (solo en este último país, unos treinta activistas fueron asesinados en 2021). Violencia contra todas las formas de oposición en Nicaragua, donde desde la represión de las protestas de 2018 (300 muertos en tres meses) el ré-

gimen de Ortega-Murillo ha encarcelado o empujado al exilio a cualquier persona sospechosa de ser crítica con él, incluso con una frase colgada en una red social. Este clima de terror político, unido a los efectos de la crisis social, ha expulsado del país a más de 100.000 nicaragüenses solo en 2021 (ver José Luis Rocha en este libro).

Huir de la inseguridad: de un peligro a otro

Centroamérica, y en particular el Triángulo Norte, “están asediados por la corrupción y la pobreza. El crimen organizado ha tomado el control de las élites políticas (...). Los más pobres se ven obligados a emigrar y los opositores a exiliarse” (Montoya, 2021b). Así resumía recientemente *Le Monde* la caricaturesca situación de la región en la introducción de su investigación sobre la “imparable erosión democrática en curso”. Y con razón. El saldo migratorio del año que acaba de terminar, 2021, batió todos los récords registrados en las últimas décadas en la frontera sur de Estados Unidos: ¡1,7 millón de migrantes fueron detenidos allí! Tres veces la media de los ocho años anteriores.

La mayoría son centroamericanos/as y mexicanos/as, pero muchos haitianos/as, sudamericanos/as y africanos/as y asiáticos/as que consiguieron llegar por su cuenta al cuello mesoamericano fueron detenidos y, en su mayoría, devueltos o incluso repatriados directamente. Tal fenómeno es de gran importancia en Centroamérica desde hace medio siglo. Su escala lo hace social, económica, cultural y políticamente inevitable. Se calcula que, de 2000 a 2020, la región habrá puesto en circulación entre 400.000 y 500.000 migrantes más de media anual.

El principal destino, con diferencia, es Estados Unidos, donde ya viven unos cinco millones de centroame-

ricanos/as⁵, de los cuales entre el 50 y el 60 % viven de forma ilegal, sin estatus formal reconocido. Sin embargo, muchos también paran en México o vienen a trabajar allí como temporeros (ver Carolina Rivera Farfán en este libro). Asimismo, varios cientos de miles de nicaragüenses viven en Costa Rica o se desplazan allí durante más o menos tiempo para trabajar. Otros, unos cuantos miles al año, prueban suerte en Europa, preferentemente en España.

El perfil de los que se marchan varía y difiere según la situación, pero también revela aspectos comunes que tienen que ver no solo con las causas de la migración –la inseguridad física, social, medioambiental o política, objetiva o percibida, que provoca la decisión de huir–, sino también con las disposiciones y perspectivas de las personas o familias que emprenden el viaje. “Una de las principales caras de la migración hacia México y Estados Unidos es la de las familias rurales cuya fuente de ingresos es la agricultura. La mayoría cultiva cereales básicos, maíz, frijoles, arroz, café o calabazas en el ‘corredor seco’”, una subregión del istmo tropical que se ve particularmente afectada por sequías cada vez más prolongadas y agudas (CEPAL, 2018). Según Aviva Chomsky en este *Alternativas Sud*, casi un tercio de los/as migrantes centroamericanos/as menciona las condiciones climáticas extremas como motivo para marcharse.

A pesar de la progresiva feminización de las migraciones en la última década (ver Gabriela Díaz Prieto en este

5. Entre 1,5 y 2 millones de El Salvador, casi 1,5 millón de Guatemala, 1 millón de Honduras, 500.000 de Nicaragua, 150.000 de Costa Rica y otros tantos de Panamá. Estimaciones aproximadas según la OIM (2021) y la ONU (2020). El número de inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos habría aumentado un 137 % entre 1990 y 2020 (530 % para los hondureños y 293 % para los guatemaltecos).